

JAIME GUZMAN

## "Rayando la cancha"



El interés del fallo con que el Tribunal Constitucional acaba de declarar la inconstitucionalidad del Movimiento Democrático Popular (MDP) y de las entidades que lo componen; es decir, el Partido Comunista, el MIR y el Partido Socialista (fracción "almeydista"), va mucho más allá de sus alcances jurídicos. Su contenido político es de tal trascendencia, que él atañe a todos los chilenos.

En efecto, la Constitución vigente —en su artículo octavo— proscribía de la vida cívica a quienes propaguen doctrinas totalitarias o violentistas.

Se trata de impedir que la democracia y el pluralismo político vuelvan a ser utilizados por quienes pretenden hacerlo con la confesa intención de terminar para siempre con toda democracia, todo pluralismo y —más grave aun— con toda libertad, estableciendo un totalitarismo irreversible.

Ciertamente, ello no evitará ni podría evitar que dichos sectores continúen en su labor clandestina. Pero lo importante es tener presente que la legalización del Partido Comunista y sus aliados no los haría prescindir de las tácticas subversivas y de infiltración que ellos desarrollan desde la clandestinidad, como creen quienes señalan que prefieren tenerlos "arriba de la mesa".

El comunismo siempre mantiene, además, su actividad clandestina "por debajo de la mesa", aunque se le permita sentarse a ella. Otorgarle la legalidad es simplemente conferirle un instrumento *adicional* para sus propósitos.

Ahora bien, aunque la Constitución proscribía a quienes propaguen doctrinas totalitarias o violentistas, le entregaba al Tribunal Constitucional la facultad exclusiva de determinar qué personas, movimientos, organizaciones o partidos incurrían en esas conductas ilícitas.

A raíz de la apertura política 1983-1984 rebrotaron en sus actividades los

grupos marxista-leninistas, no ya en forma clandestina, sino de modo abierto, agresivo y hasta desafiante. Su nuevo aglutinante fue el llamado Movimiento Democrático Popular.

Frente a ello, el espíritu anticomunista del pueblo chileno renació en toda su fuerza. Interpretando ese sentir, la Unión Demócrata Independiente (UDI) promovió un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para que éste declarase la inconstitucionalidad del MDP y de sus componentes; esto es, el PC, el MIR y el PS (fracción "almeydista").

El éxito de ese requerimiento con el reciente fallo que así lo declara, empieza a "rayar la cancha" de nuestra vida política futura, determinando quiénes serán actores válidos dentro de ella y quiénes no.

Esa línea divisoria no la fija la autoridad gubernativa, sino un órgano judicial plenamente independiente y de la más alta categoría como es el Tribunal Constitucional. No se determina de modo discrecional, según ocurre inevitablemente cuando se aplican estados jurídicos de excepción, sino que se establece conforme a un claro precepto constitucional de carácter permanente. Y no se traza entre partidarios y adversarios del gobierno, sino entre los totalitarios o violentistas y aquéllos que no lo son.

He aquí la trascendencia de este fallo que permitirá explorar en toda su eficacia una norma básica de la Constitución para combatir al marxismo-leninismo, facilitando que el gobierno vaya gradualmente reduciendo la intensidad y frecuencia en el uso de los estados jurídicos excepcionales.

La referida sentencia favorece así la indispensable reformulación de nuestro avance hacia la democracia plena, sin repetir los errores y vacíos de la reciente y frustrada apertura política.

ciarse en el período anterior a la dictación del estado de sitio.

"Ha quedado establecido el límite entre propiciar concepciones totalitarias y voluntaristas, que inevitablemente conducen a conductas de tipo rupturista, y aquellas que se encuadran dentro de la legitimidad democrática de hoy. Ninguna democracia, salvo una de tipo suicida, puede permitir que en su interior coexistan y se desarrollen corrientes que sólo propugnan la derogación del propio régimen democrático."

—¿Cuáles serían —a su juicio— las implicancias directas de la sentencia?

—En primer lugar, se regula el pluralismo social e ideológico. Una comunidad nacional sólo existe en la medida que los factores de integración son más fuertes que los disociadores. De allí que el pluralismo suponga la existencia de un acuerdo sobre los valores que regirán la sociedad deseada. Dichos principios, por su naturaleza, no son negociables y conforman la base de la institucionalidad.

"Quiénes sostienen, en nombre de la inspiración marxista-leninista, principios incompatibles con ese sustento básico de la sociedad, se automarginan automáticamente del consenso social básico y deben, en consecuencia, recibir la sanción de la proscripción, precisamente para resguardar la existencia de un verdadero pluralismo."

—¿Cuál será la trascendencia del fallo frente a la actuación de los futuros partidos políticos?

—Al transformarse el Movimiento Democrático Popular y los movimientos que lo componían, en asociaciones ilícitas, implica que para el resto de los sectores políticos democráticos del país quede clausurada toda posibilidad de diálogo, entendimiento o pacto con cualquiera de estos grupos; el hacerlo implicaría para ellos hacerse merecedores de sanciones por complicidad con asociaciones ilícitas. También diversas instituciones de tipo religioso o moral que daban cobijo a estos organismos o les daban tribuna en sus medios internos, deberán atender el fallo o acatar las consecuencias.

Aunque hay consenso en que el veredicto del Tribunal Constitucional deberá todavía ser analizado en profundidad, lo cierto es que ahora, como tal vez en mucho tiempo no se daba, existe coincidencia en todos los sectores en que es bueno "y sano para la política chilena", como indicó el ministro Cuadra. Lo más importante —según Benavente— es que en Chile, en virtud de la Constitución, del fallo del Tribunal y de la aplicación que de él seguramente hará el gobierno, Chile tendrá un pluralismo funcional a la vigencia de una sociedad libre.

M.V. ■